

CIRCULAR



Radicado No: 202648000000001023

Para: Coordinación Jurídica y Contractual, Coordinadores de los Centros zonales adscritos a la Regional – La Guajira, demás funcionarios o contratistas

Asunto: Disposiciones para garantizar la continuidad de los servicios de atención a la primera infancia, recordatorio sobre el cumplimiento de los deberes consagrados en el artículo 9 de la resolución 6300 de 2024

Fecha: 28 de enero de 2026

De manera atenta y con el fin de garantizar el interés supremo del menor, ateniendo a la necesidad de prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, de conformidad con lo establecido en la sentencia T-033 de 2020¹, así como en la sentencia del 16 de noviembre de 2016, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, con radicado 05001-23-33-000-2016-01878-01, y en el marco de las funciones establecidas en los numerales 1 del artículo noveno 5 de Las funciones de la Dirección Regional en relación con el Aseguramiento de Estándares de conformidad con las instrucciones y lineamientos impartidos por la Oficina de Aseguramiento a la Calidad, establecidas en el artículo decimo primero, y con el fin de apoyar la prestación de los servicios de protección integral a la primera Infancia a Nivel Regional, se dictan las siguientes disposiciones, de carácter excepcional y restringido para garantizar la suscripción de los contratos necesarios antes de la fecha límite establecida por la sede de la Dirección Nacional, 30 de enero de 2026.

Como es sabido, la capacidad de las personas jurídicas está relacionada con: (i) la posibilidad de adelantar actividades en el marco de su objeto social; **(ii) las**

¹ Corte Constitucional, Magistrado Ponente, José Fernando Reyes Cuartas

facultades de su representante legal y la autorización del órgano social competente cuando esto es necesario de acuerdo con sus estatutos; y (iii) la ausencia de inhabilidades, incompatibilidades, conflicto de intereses o prohibiciones para contratar, derivadas de la ley.

Igualmente, como lo señala Colombia Compra Eficiente, debe tenerse en cuenta que “hay actividades reguladas que exigen además (de lo anterior) la autorización de la autoridad competente, como es el caso de la prestación de servicios de vigilancia, que requiere la autorización de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, o la venta de combustible que demanda de los permisos establecidos por el Ministerio de Minas y Energía”

En ese sentido, la prestación del Servicio de Bienestar Familiar, por ser una actividad regulada, y sujeta a una vigilancia requiere una doble validación de la capacidad legal: de una parte, la que certifica la entidad que otorga la personería jurídica de la Entidad Administradora del Servicio (Cámara de Comercio y/o Ministerio del Interior); de otra, la que certifica la Oficina de Aseguramiento a la Calidad o la Dirección Regional competente, para los efectos de la inspección, vigilancia y control de que trata el artículo 209 de la ley 1098 de 2006.

En ese sentido, el objeto de la inspección, vigilancia y control es asegurar que las autoridades competentes cumplan sus funciones en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal para: *i) Garantizar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes y su contexto familiar; ii) Asegurar que reciban la protección integral necesaria para el restablecimiento de sus derechos; iii) Disponer la adecuada distribución y utilización de los recursos destinados al cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de infancia, adolescencia y familia; iv) Verificar que las entidades responsables de garantizar y restablecer los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes cumplan de manera permanente con el mejoramiento de su calidad de vida y la de sus familias.*

De manera que, la personería jurídica otorgada o reconocida por el ICBF permite a las instituciones prestar los servicios de protección dirigidos a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes o las familias en el territorio nacional. En consonancia con lo anterior, el artículo 37 del Manual de Contratación del ICBF, que reglamenta la contratación directa con grupos étnicos **o para la atención de grupos étnicos,**

refuerza la idea de que para la prestación del servicio de bienestar familiar se requiere contar con personería jurídica otorgada o reconocida por el ICBF; por lo cual no elimina el requisito sino que lo reafirma y en algunos casos especiales, autoriza que se pueda **suscribir y legalizar el contrato y que en el plazo de 1 mes, la entidad deba adelantar los trámites correspondientes para contar con el otorgamiento y/o reconocimiento de personería jurídica del ICBF.**

No se puede perder de vista que, de acuerdo con el artículo 9 de la resolución 6300 de 2024, existe el deber de actualización de la información de la persona jurídica, cuando se presenten los siguientes cambios: (i) *reformas estatutarias*, (ii) *inscripción de los representantes legales*, (iii) *órganos directivos* y (iv) *demás dignatarios de las instituciones*. La respuesta de dicha solicitud de inscripción, por ser un trámite reglado en documento técnico denominado Guía de Requisitos para Personerías Jurídicas, es un acto administrativo.

De manera que, en virtud de su autonomía las personas jurídicas pueden tener cambios en sus estructuras de gobierno o administración que deben registrarse y que ello requiere la expedición de un nuevo acto administrativo, pues la solicitud de inscripción de los representantes legales, órganos directivos y demás dignatarios de las instituciones o las reformas estatutarias constituye un acto administrativo reglado, que debe reportarse a efectos del control mentado. En efecto, se identifica que muchas entidades **han inscrito ya sus cambios en sus estructuras internas**, en términos de representación y/o reglamentos internos (reformas estatutarias) en la cámara de comercio (si es una ESAL) y/o en el Ministerio del Interior (Si es una entidad de base étnica); quedando pendiente su actualización también en el ICBF.

Es por esto que, atendiendo la multiplicidad de solicitudes que se han recibido, teniendo en cuenta la fecha límite para la suscripción de contratos, y que las mismas requieren la expedición de un acto administrativo, se otorgará a quienes ya hayan actualizado su información ante las entidades que les otorgaron su reconocimiento de personería (Cámara de Comercio y Ministerio del Interior) **y que solo les reste la actualización de dicha información en el ICBF**, la posibilidad de suscribir el contrato y que en el término no mayor a un (1) mes agoten los trámites necesarios para actualizar su información. En todo caso, y frente al control de legalidad de una oferta contractual, deberá acreditarse la presentación de la

solicitud de actualización ante el grupo jurídico regional o la Oficina de Aseguramiento a la Calidad, según corresponda.

Igualmente, es deber de los supervisores de contrato, realizar seguimiento a este asunto, e informarles que el incumplimiento de esta obligación dará lugar a la activación del procedimiento administrativo sancionatorio contractual contenido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, en los términos del artículo 37 del Manual de Contratación.

Cordialmente,



MAY BELLINY BADILLO BRITO
Directora Regional (e) La Guajira

Proyectó: Jorge Enrique Ariza Moscote/Coordinador Jurídico Regional.